

**INCIDENTE DE IMPEDIMENTO POR
EXCUSA**

**JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO**

EXPEDIENTES: SUP-JDC-956/2015 y
SUP-JDC-970/2015

**MAGISTRADA QUE PRESENTA LA
EXCUSA:** MARÍA DEL CARMEN ALANIS
FIGUEROA

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR
OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIADO: BEATRIZ CLAUDIA
ZAVALA PÉREZ, BERENICE GARCÍA
HUANTE Y JAVIER MIGUEL ORTÍZ
FLORES

México, Distrito Federal, a treinta de junio de dos mil quince.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta **RESOLUCIÓN INCIDENTAL** respecto de la excusa presentada por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, en los medios de impugnación al rubro indicados, promovidos por diversos ciudadanos en su carácter de Senadores de la República en contra la omisión de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, su Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, de elegir al Magistrado de esta Sala Superior que deberá ocupar la vacante existente, a raíz de la conclusión del periodo constitucional del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, el pasado veinte de abril de dos mil quince, con base en los antecedentes y consideraciones que corresponden al siguiente contenido:

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

CONTENIDO

I. ANTECEDENTES.....	3-9
1. Designación del Magistrado José Alejandro Luna Ramos.	
2. Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.	
3. Acuerdo expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	
4. Terna aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	
5. Recepción en el Senado y turno a la Comisión de Justicia.	
6. Acuerdo de la Comisión de Justicia.	
7. Dictamen de la Comisión de Justicia.	
8. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.	
9. Trámite y sustanciación.	
10. Solicitud de excusa.	
II. CONSIDERACIONES	
1. Actuación colegiada.....	10-11
2. Excusa	
2.1. Planteamientos formulados en el escrito de solicitud de excusa.....	11-12
2.2. Consideraciones de la Sala Superior	
I. La función jurisdiccional como garantía del derecho a la tutela jurisdiccional.....	13-14
II. El principio de imparcialidad.....	14-16
III. Tipos de causas que afectan el principio de imparcialidad.....	16-18
a) Subjetivas	
b) Objetivas	
IV. Oportunidad para abstenerse de conocer el asunto o para solicitar la recusación.....	18-19
V. Precedentes relacionados con las causas de impedimentos análogos.....	19-24
a) Precedente SUP-IMP-3/2010	
b) Precedente SUP-IMP-1/2011	
VI. Criterios sostenidos por esta Sala Superior respecto a la relación entre los impedimentos y el principio de imparcialidad.....	24-26
VII. Análisis de las consideraciones expuestas por la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.....	26-40
a) Solicitud para excusarse de conocer únicamente respecto al fondo del asunto.	
b) Examen de la causa de impedimento invocada	
III. PUNTOS DE ACUERDO.....	40

I. A N T E C E D E N T E S

1. Designación del Magistrado José Alejandro Luna Ramos.

El veintiuno de abril de dos mil cinco fue nombrado por el Senado de la República el Magistrado José Alejandro Luna Ramos como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo del fallecimiento del Magistrado José Luis de la Peza Muñoz Cano, cuyo periodo constitucional concluiría el cuatro de noviembre de dos mil seis, en términos de lo previsto en el párrafo antepenúltimo del artículo 99 constitucional.

2. Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El primero de julio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo artículo Cuarto Transitorio se previó, que para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores, antes del veinte de abril de dos mil quince, debía designar al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituiría al magistrado cuyo mandato concluía en la fecha citada.

3. Acuerdo expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tres de febrero de dos mil quince, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el acuerdo número 3/2015, mediante el cual determinó el procedimiento para integrar la

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

terna que sería propuesta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para la designación del Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ocuparía el cargo del veintiuno de abril de dos mil quince al cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

4. Terna aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez llevado a cabo el procedimiento señalado en el punto anterior, en sesión solemne de diez de marzo de dos mil quince, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la terna que sería propuesta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

5. Recepción en el Senado y turno a la Comisión de Justicia. El diez de marzo de dos mil quince, se recibió en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con la terna señalada, misma que se acordó turnar a la Comisión de Justicia.

6. Acuerdo de la Comisión de Justicia. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo por el que estableció el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Dictamen de la Comisión de Justicia. El veintiséis de marzo de dos mil quince, la citada Comisión aprobó el dictamen

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la designación de un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

8. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veintinueve de abril y cuatro de mayo de dos mil quince, los ciudadanos Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, Raúl Gracia Guzmán, Martín Orozco Sandoval, Luis Fernando Salazar Fernández, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, César Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Salvador López Brito, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor Larios Córdova, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, en su carácter de Senadores integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, contra de la omisión de la citada Legislatura, su Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, de elegir al Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que deberá ocupar la vacante existente.

9. Trámite y sustanciación. Recibidas las constancias atinentes, el Magistrado Presidente de este Tribunal ordenó integrar y registrar los expedientes indicados al rubro, mismos que fueron turnados a la ponencia del Magistrado Salvador

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Olimpo Nava Gomar, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

10. Solicitud de excusa. El veintiuno de mayo del año en curso, la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa presentó en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, escrito dirigido al Magistrado Presidente, en el cual plantea lo siguiente:

**Magistrado Constancio Carrasco Daza
Presidente Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
Presente**

María del Carmen Alanis Figueroa, Magistrada Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 146, fracción XVIII, y 220, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, me permito plantear ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mi excusa para conocer en el fondo, si el Pleno de este Tribunal determina abordar su análisis, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015, en atención las siguientes consideraciones. Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015 fueron promovidos por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pertenecientes la LXII Legislatura del Senado de la República, a fin de impugnar la omisión de dicha legislatura, su Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de designar al Magistrado de la Sala Superior para cubrir la vacante existente.

Consideran que tal omisión vulnera su derecho a ser votados, en su modalidad de ejercer las funciones inherentes a su cargo, al impedir el ejercicio de su función como Senadores de la República, al no poder votar en el Pleno de dicha Cámara al Magistrado faltante.

Por tanto su pretensión es que esta Sala Superior ordene al Pleno del Senado de la República la designación del magistrado faltante de este órgano jurisdiccional, a partir de la terna propuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

INCIDENTE SUP-JDC-956/2015 y SUPJDC-970/2015

En mi concepto, esta Sala Superior carece de competencia para conocer y resolver los juicios ciudadanos referidos: Empero, si la mayoría de los integrantes de la Sala Superior considera lo contrario, solicito se me excuse de la resolución de los asuntos en comento, en atención a lo siguiente:

I. Incompetencia de la Sala Superior

Conforme al artículo 99, párrafo onceavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Magistrados Electorales integrantes de la Sala Superior son elegidos por la Cámara de Senadores¹, a partir de la propuesta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El procedimiento de designación se desarrolla en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Conforme a dicho precepto, el Pleno de la Suprema Corte aprueba por mayoría simple de los presentes, ternas que se proponen al Senado por cada uno de los cargos a elegir.

Dichos preceptos ponen en evidencia que la competencia constitucional y legal para la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Senado de la República, y no a la propia Sala Superior.

Por tanto, en mi opinión, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 99, párrafo onceavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c); 189, fracción I, inciso e), y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79 y 83, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia para resolver los presentes juicios, pues tal atribución, en todo caso, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el acto de designación de Magistrado Electoral es un acto complejo en el que intervienen tanto la propia Corte, como la Cámara de Senadores.

En este sentido, si la Suprema Corte es uno de los órganos que participa en la conformación de la Sala Superior, al proponer la terna correspondiente, tocaría a la propia Corte, en su calidad de máximo órgano jurisdiccional del País, el control jurisdiccional del procedimiento establecido en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, establecidas en los artículos 94 y 105 de la Carta Magna, cuenta con facultades de control constitucional.

¹ Se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes.

INCIDENTE SUP-JDC-956/2015 y SUPJDC-970/2015

Aunado a lo anterior, al tratarse de la designación de uno de sus integrantes, el propio Tribunal tiene interés en la designación, por lo que se convertiría en juez y parte. En efecto, se trata de la integración de la Sala Superior, circunstancia que coloca a la institución en la calidad de parte interesada en el presente asunto, razón por la cual nuestra intervención en el proceso de selección; incluso cuando se trata de una impugnación, no se ajustaría a los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva.

Lo anterior resulta congruente con los principios de la función jurisdiccional, conforme a los cuales, se debe evitar que una de las partes interesadas sea la que decida la controversia.

Por tanto, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sería improcedente y la controversia debería resolverse a través de la vía que el Máximo Tribunal del País determinara.

II. Excusa de la suscrita para conocer del fondo del presente asunto

Ahora bien, si la opinión mayoritaria es en el sentido de que sí contamos con competencia, considero que se actualiza la causal de excusa, relativa a la existencia de una relación laboral con los integrantes de la terna, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 146, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, supuesto que resulta aplicable conforme a lo establecido en el numeral 220, primero párrafo, de la citada Ley Orgánica.

El artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece las causas de impedimento aplicables también a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación². Entre los supuestos previstos en dicho precepto no se establece como supuesto para solicitar la excusa la existencia de una relación laboral con alguna de las partes. Sin embargo, la fracción XVIII de dicho precepto establece la posibilidad de supuestos adicionales por causas análogas a las establecidas.

Ahora, el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos³, dispone que todo servidor público debe excusarse de intervenir en la resolución de asuntos que puedan beneficiar a personas con quienes tenga relaciones laborales, entre otros supuestos, al establecer lo siguiente:

² Aplicable conforme a lo establecido en el numeral 220 de la LOPJF

³ Aplicable en atención a lo dispuesto en los artículos 131, fracción XII y 219 de la LOPJF

INCIDENTE SUP-JDC-956/2015 y SUPJDC-970/2015

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
[...]

XI.- **Excusarse** de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, **incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio** para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, **o para terceros con los que tenga relaciones** profesionales, **laborales** o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.⁴
[...]

Por tanto, la existencia de una relación laboral con alguno de los involucrados, impone la obligación de excusarse del conocimiento y resolución del asunto.

En el caso, los tres integrantes de la terna laboran en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo que entre ellos y la suscrita existe una relación laboral. En efecto, Javier Aguayo Silva, se desempeña como Secretario Instructor en la ponencia a mi cargo; en tanto que Enrique Aguirre Saldivar y Julio Cesar Cruz Ricárdez son Secretarios de Estudio y Cuenta en la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.

Por tanto existe una relación laboral entre la suscrita y los integrantes de la terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual se actualiza el supuesto de excusa referido.

Por lo expuesto, me permito solicitarle que, en su carácter de Presidente, someta a consideración de la honorable Sala Superior de este Tribunal Electoral, la solicitud de excusa en la resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015, en caso de que la opinión mayoritaria sea en el sentido de que esta Sala Superior es competente para abordar el estudio de los presentes asuntos.

⁴ El resaltado es propio.

II. CONSIDERACIONES

1. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa el presente acuerdo corresponde al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada y plenaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia **11/99** de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.**⁵.

Lo anterior, en atención a que la materia de conocimiento del asunto versa sobre la procedencia o no de la solicitud de excusa presentada por la Magistrada de esta Sala Superior María del Carmen Alanís Figueroa para conocer, en el fondo, si el Pleno de este Tribunal determina su análisis, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con la claves SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015.

En ese sentido, lo que al efecto se resuelva no constituye un acuerdo de mero trámite, por lo que debe ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada y plenaria, la que determine lo

⁵ Consultable a fojas 447-449 de la *Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral*, Jurisprudencia, Volumen 1.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

que en Derecho proceda. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 221, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 43 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2. Excusa

2.1. Planteamientos formulados en el escrito de solicitud de excusa

En el escrito de solicitud de excusa, la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa, señala: *“me permito plantear ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mi **excusa para conocer en el fondo**, si el Pleno de este Tribunal determina abordar su análisis...”*

Asimismo, realiza una serie de consideraciones encaminadas a sustentar que la Sala Superior es incompetente para conocer de los medios de impugnación bajo estudio, y señala *“esta Sala Superior carece de competencia para conocer y resolver los juicios ciudadanos referidos: **Empero, si la mayoría de los integrantes de la Sala Superior considera lo contrario, solicito se me excuse de la resolución de los asuntos en comento...**”*

La Magistrada solicita excusarse de resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 146, fracción XVIII⁶, de

⁶ XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 8, fracción XI⁷, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues considera que tiene **una relación laboral** con los integrantes de la terna, quienes laboran en esta Sala Superior, por lo que estima que *“existe una relación laboral entre la suscrita y los integrantes de la terna propuesta por la Suprema Corte de justicia de la Nación, razón por la cual se actualiza el supuesto de excusa referido”*.

Al respecto señala que si bien dicho impedimento no se encuentra previsto en los supuestos del referido artículo 146, la fracción XVIII establece que puede invocarse *cualquier otra análoga*, y sobre esta base fundamenta su excusa en uno de los supuestos previstos en la citada Ley Federal de Responsabilidades.

2.2. Consideraciones de la Sala Superior

Esta Sala Superior considera que, en el caso, **resulta infundado el impedimento y, en consecuencia, no procede**

⁷ XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o **para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios**, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

...

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

la excusa planteada por la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, para conocer de los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificados con los números de expediente SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015, toda vez que la causa de impedimento invocada (la existencia de una relación laboral con los integrantes de la terna en el procedimiento de designación de magistrados), no es aplicable al caso al no constituir un supuesto que resulte análogo a alguno de los previstos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que debe prevalecer el principio de que los jueces no pueden abstenerse de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo que existan razones fundadas para ello, pues es un deber constitucional participar y votar tales asuntos, excepto cuando existan causas que pongan en riesgo su imparcialidad, cuestiones que en el caso no se advierten, como se comprueba enseguida.

I. La función jurisdiccional como garantía del derecho a la tutela jurisdiccional

El artículo 17 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a la tutela jurisdiccional, que comprende el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y la eficacia de la sentencia.

La función jurisdiccional constituye la garantía de esos derechos, dado que el Estado se hace cargo de instaurar órganos jurisdiccionales para resolver los litigios que se

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

presenten entre particulares, así como para la protección, garantía y, en su caso, reparación de los derechos.

Conforme con lo anterior, por una lado se reconoce el derecho de todas las personas de ser juzgadas por órganos jurisdiccionales independientes, integrados por juzgadores y juzgadoras imparciales y, por el otro, se establece el deber de quienes ejercen la jurisdicción, de conocer y resolver las controversias que sean sometidas a su conocimiento (principio de inexcusabilidad) salvo que existan condiciones particulares inherentes al juzgador o al objeto del proceso, que puedan poner en riesgo o duda su imparcialidad.

II. El principio de imparcialidad

La imparcialidad es la ausencia de cualquier elemento subjetivo u objetivo que implique la posibilidad de que el juez en el desempeño de su función jurisdiccional anteponga o sea proclive al interés particular de una de las partes.

Si la función jurisdiccional consiste en la tutela de los derechos e intereses legítimos de las personas por medio de la aplicación del derecho al caso concreto, la imparcialidad se quebranta cuando el juez puede servir (favorecer o perjudicar) en un caso concreto a una de las partes.⁸

⁸ En la función electoral se ha entendido que la imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista. Cfr. Tesis P./J. 144/2005 de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, pág. 111.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

La regulación de la imparcialidad no puede atender a descubrir el ánimo y los motivos personales de cada juzgador y en cada proceso, por ello, establece de manera taxativa ciertas situaciones, objetivamente constatables. Cuando alguna de esas causas se actualiza en un proceso determinado, el juzgador está autorizado y obligado a apartarse del conocimiento de la causa o puede ser apartado de ella.

Se parte de la base de que está proscrita la abstención y la recusación sin causa justificada, como principio protector del derecho de los justiciables a la tutela jurisdiccional y de la función jurisdiccional, pues se estima que deben existir razones sustanciales que de manera objetiva pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador, con el fin de evitar que el juzgador sin causa verdaderamente justificada se abstenga de resolver el asunto sometido a su consideración, garantizando con ello el ejercicio responsable de la función jurisdiccional y, tratándose de órganos colegiados, favorecer la normal integración del mismo.

Por ello, se exige que las circunstancias invocadas como fundamento para la abstención o recusación del juzgador se encuentren plenamente probadas y correspondan con aquellas que de manera taxativa se prevén en la legislación (generalmente llamadas impedimentos), derivadas de las máximas de experiencia como suficientes para poner en duda la imparcialidad de la persona que juzgará, las cuales deben interpretarse de manera estricta y restringida, aun en el

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

supuesto de que se establezca una cláusula genérica o residual, puesto que debe prevalecer la presunción de imparcialidad que tiene a su favor el juez, salvo prueba en contrario.

Un sector amplio de la doctrina considera, que las causas de impedimento no suponen que de concurrir alguna el juez sea parcial, sino simplemente admiten que se convierte en sospechoso de serlo, esto es, que existe el riesgo de parcialidad de favorecer o perjudicar a una de las partes. Por ello, se exige que esa sospecha solo existe si antes el legislador la ha establecido como impedimento para que el juzgador conozca del asunto.⁹

III. Tipos de causas que afectan el principio de imparcialidad

La imparcialidad se entiende como una condición inherente y subjetiva del juzgador. Por ende, lo que hace la ley es intentar objetivarla, para lo cual establece una serie de situaciones que se estima pueden llevar a poner en riesgo la imparcialidad del juzgador (impedimentos).

La doctrina y jurisprudencia¹⁰ coinciden en señalar que en la positivización de dichas situaciones se pueden advertir dos

⁹ DEVIS ECHANDÍA, Hernando, *Teoría General del Proceso*, Buenos Aires, 1997; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Roberto, *Neoprocesalismo, Teoría del proceso civil eficaz*, ARA, Perú, 2013; MONTERO AROCA, Juan, *Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales*, Valencia, 1990, entre otros.

¹⁰ Puede consultarse: MONTERO AROCA, Juan, *La imparcialidad judicial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos*, disponible en: www.juridicas.unam.mx; NIEVA FENOLL,

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

tipos de causas que pueden poner en riesgo la imparcialidad del juzgador: las subjetivas y las objetivas.

a) Subjetivas

Este tipo de causas se desprende de las relaciones del juez con las personas en su actuar cotidiano. La relación del juzgador se regula **respecto a las partes**, pero también se extiende a los procuradores o abogados de ellas.

Se regula el supuesto de que el juez tenga relación (parentesco, económica, litigiosa, amistad o enemistad, familiaridad,) con alguna de las partes, con su abogado o procurador, con una autoridad o funcionario o, incluso, con otro juez.

Como el juzgador es una persona inmersa en una sociedad, la determinación de estas relaciones debe provenir del legislador, pues debido al deber del ejercicio de la función jurisdiccional, los juzgadores no deben ampliar injustificadamente las causas vinculadas con las relaciones personales ni dejar de aplicar las existentes, incluso, cuando se encuentre previsto el supuesto genérico de ellas, el cual debe ser interpretado de manera taxativa y en analogía con las previstas por el legislador.

Jordi, *Derecho Procesal*, Tomo I, Marcial Pons, Barcelona, 2015, así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 1/2012 (9a.) de rubro: **IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL** (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 460).

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

b) Objetivas

No se vinculan a las relaciones fácticas y personales del juzgador, sino con las relaciones jurídicas del juez con el objeto del proceso.

Esas causas son, por ejemplo, cuando el juez (en una condición distinta) haya intervenido antes en el proceso (como representante, defensor, asesor) de alguna de las partes, o bien, haya emitido un dictamen u opinión sobre la controversia o la causa (como testigo, perito, fiscal investigador). Otra causa común es cuando el juzgador intervino en el proceso con anterioridad, en calidad de instructor del proceso o juez de primera instancia.

IV. Oportunidad para abstenerse de conocer el asunto o para solicitar la recusación.

Cuando concurre alguna de las causas subjetivas, de inmediato y desde el inicio del procedimiento, el juzgador debe apartarse de conocer el asunto, dado que la sospecha sobre su imparcialidad le impide realizar cualquier acto procesal, lo excluye de todo el proceso, por lo que no se le permite realizar unos actos sí y otros no, sino que se le impide llevar a cabo todo acto procesal.

Por cuanto hace a las causas de carácter objetivo que se originan dentro del proceso, al juzgador no se le excluye del conocimiento de todo el proceso, sino de la realización de

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

algunos de los actos procesales que lo integran, en una fase del proceso.

Por ejemplo, si el juez conoció en primera instancia ya realizó ciertos actos procesales, pero no podrá conocer del recurso, o bien, si actuó como defensor de alguna de las partes, es claro que realizó actos procesales, pero desde el enfoque de la parte que defendía; empero, se le impide participar desde el inicio en el proceso seguido para la solución del conflicto.

V. Precedentes relacionados con las causas de impedimentos análogos

En diversos medios de impugnación, las partes han solicitado la recusación de uno o más integrantes de la Sala Superior, por considerar que se surte alguno de los supuestos de impedimento.

Para el caso, se estima oportuno revisar las resoluciones emitidas en los expedientes SUP-IMP-3/2010 y SUP-IMP-1/2011, en virtud de que en ellos se trataron supuestos de hecho que guardan similitud con el del presente caso.

a) Precedente SUP-IMP-3/2010

La solicitud de declaración de impedimento se presentó por un ex trabajador de esta Sala Superior, concretamente de la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para que el referido Magistrado se abstuviera de conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto para controvertir las

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

sanciones administrativas que le fueron impuestas en el diverso expediente SUP-ASA-1/2010.

En dicho asunto, en concepto del solicitante se actualizaba la causa de impedimento prevista en los artículos 220, párrafo primero, en relación con los numerales 146, fracciones IV y XVIII, 186, fracción III, inciso d), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que tuvo conocimiento del procedimiento administrativo sancionador instaurado en su contra, por conducto del secretario particular del Magistrado recusado, a lo cual se debía adicionar que el motivo de su separación, como servidor público adscrito a este órgano jurisdiccional, derivó precisamente del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades incoado en su contra.

Al resolver dicha solicitud, la Sala Superior consideró, en principio, que no se trataba de un conflicto o diferencia laboral entre el órgano jurisdiccional electoral y sus trabajadores, sino de la imposición de una sanción por parte de la Comisión de Administración en un procedimiento administrativo y, en particular, por cuanto hace a la causa análoga de impedimento invocada respecto a la prevista en la fracción IV antes referida, que alude a haber presentado querrela o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes en contra de alguno de los interesados, se consideró que el hecho de que un Magistrado haya tenido conocimiento del procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del entonces promovente, por conducto de su secretario particular no implicaba que el aludido

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Magistrado hubiera presentado la denuncia en contra del solicitante, por lo cual no era posible aplicar la analogía solicitada.

Por las razones anteriores, se determinó infundada la causa de impedimento.

b) Precedente SUP-IMP-1/2011

En los recursos de apelación SUP-RAP-24/2011, SUP-RAP-26/2011, SUP-RAP-27/2011 y SUP-RAP-32/2011, los apelantes recusaron a la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, al estimar que su asistencia a una cena con alguna de las partes en los referidos medios de impugnación generaba una presunción fundada de que tenía un interés personal en los expedientes y una amistad estrecha con alguna de las partes en el litigio, por lo que, en su concepto, se actualizaban las causas de impedimento previstas en el artículo 146, fracciones II (amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores), III (interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes) y XVIII (cualquier otra análoga) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, este órgano jurisdiccional consideró que antes de proceder al análisis particularizado de las causales de impedimento propuestas, era indispensable precisar que los principios rectores de la función jurisdiccional están previstos en la Constitución General de la República y a partir de ella, las causales de impedimento se concretizan en la Ley Orgánica del

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Poder Judicial de la Federación y constituyen el marco normativo referencial para el análisis de su acreditación. Por esta razón, se sostuvo que el examen de las causales de impedimento se analizarían a la luz de la Constitución Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Respecto a la causa de impedimento relativa a la supuesta existencia de una amistad estrecha con alguna de las partes, la misma se estimó infundada, dado que dicha relación fue negada por la Magistrada y los solicitantes no lo probaron en autos. Al respecto se consideró, que como existe la presunción de imparcialidad respecto a los juzgadores, para que ésta se destruya deben existir elementos de convicción que acrediten de manera objetiva la relación de amistad, lo cual no se encontraba probado en el expediente.

Por cuanto hace a la causa de impedimento relativa a un supuesto interés personal en el asunto, derivado del hecho de que supuestamente en la cena realizada en su domicilio se recibieron alegatos en torno a la controversia planteada en los medios de impugnación o se trataron temas relacionados con los propios asuntos, también se estimó infundada.

Al respecto se señaló que no estaba controvertido el verificativo de la reunión en el domicilio de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa el nueve de marzo de dos mil once ni la asistencia de Luis Videgaray, diputado federal, Sebastián Lerdo de Tejada, diputado federal y representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Marco Antonio Baños, Consejero del

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

propio Instituto, Enrique Ochoa Reza, Director del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral; dado que la Magistrada no planteó controversia alguna en relación con ese hecho. Sin embargo, se dijo que sí existía disenso respecto que en el citado encuentro se hubieren abordado aspectos relacionados con la resolución de los asuntos.

Lo infundado de dicha causa de impedimento derivó de que no había elementos de prueba, ni aun indiciarios, para corroborar si en dicha reunión se trató lo relativo a las controversias presentadas en los medios de impugnación, más allá del hecho de la propia reunión y tampoco obraban en autos elementos objetivos que permitieran establecer el pretendido interés de la magistrada en los asuntos, motivo por el cual, no era posible arribar a la configuración de esa causa de impedimento.

Finalmente, por lo que respecta a la causa prevista en el la fracción XVIII del artículo 146 de la citada Ley Orgánica, referente a cualquier otra situación análoga, también se estimó infundada.

Al respecto, **esta Sala Superior consideró que para que la analogía opere se requiere que las situaciones que se comparan sean semejantes de manera relevante, a fin de que la razón apreciada en una opere también en la otra, pues lo importante era precisar no sólo si las situaciones que se comparan son semejantes, sino que la semejanza es relevante.**

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

En ese orden de ideas, esta Sala Superior señaló que no podía prever la existencia de presunciones *iure et de iure*, en cuanto a la parcialidad de un determinado servidor público, específicamente de un funcionario encargado de la labor jurisdiccional, porque existe en su beneficio la presunción *iuris tantum*, relativa a que todos los jueces, entendido en el sentido más amplio de la acepción, son imparciales, salvo prueba en contrario.

Lo infundado de la causa de impedimento radicó en que si bien no estaba controvertida la celebración del convite, lo cierto era que no estaba acreditado que los gastos del evento hubieran sido pagados por alguno de los interesados, circunstancias que en sí mismas no configuraban la aplicación analógica del supuesto previsto en la fracción IX del numeral 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por las razones anteriores se declaró infundado el impedimento.

VI. Criterios sostenidos por esta Sala Superior respecto a la relación entre los impedimentos y el principio de imparcialidad

Siguiendo la línea doctrinal y jurisprudencial actual con relación a las causas de impedimento, la Sala Superior ha delineado los criterios siguientes:

- El análisis de las causas de impedimento deben hacerse a la luz de la exigencia fundamental contenida en el

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

bloque de constitucionalidad y convencionalidad (artículos 101 de la Constitución Federal, 14, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8°, primer párrafo de la Convención Americana de Derechos Humanos) tendente a proteger **que la función judicial** se ciña a los principios básicos de excelencia, objetividad, **imparcialidad**, profesionalismo e independencia, en la medida que constituyen mecanismos esenciales para garantizar el adecuado desempeño del juzgador.

- Los principios rectores de la función judicial contienen un enfoque dual, porque protegen a los miembros de la judicatura y, a su vez, favorecen a los justiciables en la impartición de justicia en condiciones de **imparcialidad**, lo cual implica, que el juzgador que resuelve una controversia se aproxime a los hechos de la causa, careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio, ofreciendo garantías objetivas y suficientes que permitan desterrar toda duda respecto a la ausencia de su imparcialidad.
- La imparcialidad personal o subjetiva del juzgador constituye una presunción legal que persiste mientras no se cuente con prueba fehaciente que demuestre lo contrario.
- El marco normativo vinculante para el examen de la imparcialidad subjetiva de los magistrados electorales se encuentra previsto en la Constitución Federal (artículo 101) y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (numeral 146), en virtud de que este último

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

ordenamiento es el que **contextualiza y concretiza el principio de imparcialidad** y prevé los mecanismos a efecto de salvaguardarlo.

- En virtud de que las causas de impedimento implican que un juzgador deje de ejercer la función jurisdiccional, a fin de proteger el ejercicio de la función judicial y a los miembros de la judicatura, la cláusula general prevista en la última fracción del artículo 146 de la Ley Orgánica debe interpretarse de manera restringida, ya que implica una salvedad al principio de inexcusabilidad, de tal forma que la causa de impedimento invocada o solicitada por alguna de las partes para que el magistrado deje de conocer un asunto debe encontrar una **referencia directa con alguna de las causas previstas en el artículo 146** de la ley orgánica citada.

VII. Análisis de las consideraciones expuestas por la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa

a) Solicitud para excusarse de conocer únicamente respecto al fondo del asunto.

Como se dijo, en el escrito de solicitud de excusa, la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa planteó su **excusa para dejar de conocer en el fondo**, por estimar que se surte la hipótesis prevista en los artículos 146, fracción XVIII¹¹,

¹¹ XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 8, fracción XI¹², de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues considera que tiene **una relación laboral con los integrantes de la terna, ya que laboran en esta Sala Superior.**

En este sentido, la excusa resulta improcedente, toda vez que al estar sustentada en una causa que se vincula con una condición de carácter subjetivo, atinente a la relación personal que expresa la magistrada, en caso de que fuera procedente, tendría que dejar de intervenir de manera total en el procedimiento, pues conforme con el principio de imparcialidad, cuando concurre una causa de ese tipo, la persona que ejerce la jurisdicción está obligada a separarse de inmediato y desde el inicio del proceso, porque la sospecha de su imparcialidad se extiende a todos los actos del proceso, pues éste solo es instrumental respecto de los derechos e intereses de las partes, por lo que la sospecha de imparcialidad también se aplica en la determinación de uno de los presupuestos procesales

¹² XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o **para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios**, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

...

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

(competencia del órgano jurisdiccional para conocer del asunto).

Por tanto, no resulta jurídicamente válido que pueda intervenir para definir la competencia del órgano y, en su caso, abstenerse de pronunciarse sobre el fondo, como lo solicita la magistrada, sobre todo si se toma en consideración, que en el presente caso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el magistrado instructor presentó a la magistrada y magistrados que integran la Sala Superior el proyecto de sentencia, cuyo análisis inició en la sesión privada del dieciocho de mayo de dos mil quince, en la cual la magistrada estuvo presente y participó y fue con posterioridad (veintiuno de mayo) que presentó la excusa.

b) Examen de la causa de impedimento invocada

También resulta infundada la causa de impedimento invocada por la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa como fundamento para excusarse de resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por algunos Senadores integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, contra la omisión de dicha legislatura, su Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, de elegir al Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que deberá ocupar la vacante existente, a raíz de la

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

conclusión del periodo constitucional, el pasado veinte de abril de dos mil quince.

En efecto, la Magistrada considera que se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 146, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como causa de impedimento que le autoriza a excusarse para conocer del asunto, porque considera que tiene **una relación laboral con los integrantes de la terna, ya que laboran en esta Sala Superior.**

El artículo 146 de la Ley citada establece los supuestos que, por su naturaleza, permiten presumir legalmente la parcialidad en el juzgador, en relación con alguna de las partes en la controversia, con la consecuente afectación del principio referido, razón por la que, cuando el juzgador se sitúa en alguna de esas causas debe dejar de conocer del asunto.

En términos de lo previsto en el artículo 220 de la propia ley, estos supuestos son aplicables a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los **magistrados electorales**, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados. Por ende, **están impedidos para conocer de los asuntos**, por alguna de las causas siguientes:

- I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;

IV. Haber presentado querrela o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados;

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;

VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma fracción I, en virtud de querrela o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I;

VIII. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador;

IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeara alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos;

X. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;

XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;

XII. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados;

XIII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título;

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

XIV. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;

XV. Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados;

XVI. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es motivo de impedimento para magistrados de los tribunales unitarios el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones II a IX del artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales;

XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados. Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo; y

XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores.

Como se aprecia, la causa de impedimento solicitada por la Magistrada no se encuentra prevista en ninguno de los supuestos normativos transcritos, tal como ella lo reconoce. Empero, ella sitúa la causa de impedimento en la fracción XVIII, pues estima que la existencia de la relación laboral con los integrantes de la terna es una causa análoga a las previstas en el artículo 146.

La analogía se refiere a la operación interpretativa mediante la cual se atribuye a un supuesto que no encuentra una regulación expresa en el ordenamiento jurídico, la misma consecuencia prevista por el legislador para un caso semejante, esto es, se justifica que a un determinado supuesto de hecho, previsto en

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

una norma jurídica, se le atribuya una determinada consecuencia de derecho.

Por ello, para proteger el ejercicio de la función judicial y a los miembros de la judicatura, la causa de impedimento genérica debe interpretarse de manera restringida, porque implica una salvedad al principio de inexcusabilidad; de ahí que se exija que la causa análoga de impedimento deba encontrar una **referencia directa con alguna de las causas previstas en el artículo 146** de la ley orgánica citada, pues para que la analogía opere se requiere que las situaciones que se comparan sean semejantes **de manera relevante, en aspectos sustanciales o importantes**, a fin de que la razón apreciada en una opere también en la otra.

Para esta Sala Superior, lo importante es precisar no sólo si las situaciones que se comparan son semejantes, sino que la semejanza es relevante, pues la finalidad de las causas de impedimento es evitar que el criterio del magistrado pueda ser influido en alguna medida, en relación al asunto en trámite, de ahí que, para la aplicación analógica es indispensable que de la realización del hecho se advierta algún elemento que pudiera afectar el bien jurídico protegido, esto es, evitar que a través de esos actos concretos se pueda ver comprometido el criterio del juzgador.

En el caso, las causas expresamente previstas en las fracciones I a XVII se refieren a razones que pueden afectar la

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

imparcialidad del magistrado, derivadas del parentesco, del interés personal que pueda tener en el asunto, de las relaciones de afecto o animadversión del magistrado con las partes, de las relaciones extraprocesales que puedan existir entre el magistrado o sus parientes y las partes o de los vínculos litigiosos que puedan existir entre el magistrado y las partes, sin que en ellas se pueda situar las relaciones laborales referidas por la magistrada, no solo porque en los juicios no se encuentra en litigio el derecho de alguno de los integrantes de la terna, sino también, porque, incluso, el vínculo de trabajo, por sí solo, no implicaría una relación de familiaridad o de amistad estrecha o enemistad manifiesta que pueda comprometer la actuación personal, objetiva e imparcial del juzgador, dado que esta relación se puede establecer dentro de un parámetro de cordialidad y respeto alejado de cualquier vínculo que actualice el supuesto de cercanía exigido en la normativa como impedimento a la actuación judicial.

En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano respecto de los cuales pide excusarse la Magistrada, **los promoventes** son Senadores integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El acto reclamado es la **omisión** atribuida a dicha legislatura, a su Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, de elegir al Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que deberá ocupar la vacante existente, a raíz de la

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

conclusión del periodo constitucional, el pasado veinte de abril de dos mil quince.

A los citados juicios no han comparecido los integrantes de la terna como terceros interesados ni como coadyuvantes. Por ende, **no tienen la calidad de parte**.

Por otro lado, se tienen en cuenta que la pretensión de la parte actora consiste en que se requiera a las autoridades responsables a **completar**, a la brevedad, el **procedimiento constitucional previsto como una de sus funciones y obligaciones como senadores de la República**, para la designación de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Su **causa de pedir** la hacen consistir, fundamentalmente, en que la omisión reclamada viola sus derecho político-electoral a ejercer su cargo, porque les ha impedido participar plenamente en el desempeño de su función, al dejar inconcluso el procedimiento, sin causa alguna que lo justifique, lo cual vulnera también los principios fundamentales inherentes a la impartición de justicia constitucional electoral, así como el de legalidad, certeza y seguridad jurídica.

Como se aprecia, lo solicitado por los promoventes no se relaciona con ninguno de los derechos de los integrantes de la terna, puesto que su pretensión se vincula con el ejercicio de su cargo como Senadores y con el cumplimiento de sus deberes

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

como servidores públicos integrantes del Poder Legislativo, sin que en forma alguna supediten los derechos de los integrantes de la terna, dado que su pretensión se dirige a solicitar la conclusión del procedimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la conclusión del procedimiento que solicitan los Senadores no necesariamente termina con el nombramiento de alguno de los actuales integrantes de la terna, puesto que, en abstracto, el procedimiento prevé la posibilidad de rechazar la terna y solicitar una nueva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conforme con lo anterior, la causa invocada por la Magistrada no se asemeja a ninguna de las previstas en la Ley Orgánica, pues la materia de controversia se dirige a un aspecto procedimental, en el cual no se encuentran directamente vinculados los derechos de las personas con quien dice tener la relación laboral; de ahí que deba prevalecer la presunción de imparcialidad, porque no existen elementos que pongan en duda el actuar de la magistrada, alejado de los intereses de las partes.

Por otra parte, tampoco se puede sostener que lo previsto en la fracción XI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos pueda invocarse como causa de impedimento “análoga” en el presente caso,

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

porque lo ahí regulado se refiera a las **causas de responsabilidad** en que pueden incurrir los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por el incumplimiento de sus obligaciones.

En efecto, la fracción XI del artículo 131 de la ley orgánica citada establece, que serán causa de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, **siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional.**

Dentro de esas causas se encuentra la invocada por la magistrada, consistente en la obligación de excusarse de intervenir en la resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, **o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios**, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Como se aprecia, esta obligación de los servidores públicos encuentra también su razón de ser en el principio de imparcialidad; sin embargo, como antes se dijo, el vínculo de trabajo al que hace alusión la Magistrada, por sí solo, no

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

implicaría la existencia de una relación de familiaridad o de amistad estrecha o enemistad manifiesta que pueda comprometer la actuación personal, objetiva e imparcial del juzgador, ni tampoco un interés personal, familiar o de negocios de quienes resolverán los juicios, porque, se reitera, en el asunto no son parte los integrantes de la terna respecto de los que plantea la relación laboral y no se encuentran controvertidos sus derechos, sino el derecho de los senadores a participar en el procedimiento de sustitución de magistrados hasta su conclusión; por lo que debe prevalecer el principio de inexcusabilidad de los jueces como base de una adecuada administración de justicia.

Finalmente, la Magistrada señala que se encuentra impedida para conocer y resolver el asunto, porque tiene una relación laboral **con los tres integrantes de la terna.**

De aceptar como impedimento la causa invocada como excusa por la magistrada, en los términos que la plantea, llevaría al extremo de concluir que los seis magistrados integrantes este órgano jurisdiccional electoral federal se encuentran impedidos para conocer de los medios de impugnación al rubro indicados, lo cual traería como consecuencia que este órgano jurisdiccional estuviera imposibilitado para resolver lo que en derecho procede respecto de la litis planteada, cuestión que sería inadmisibile a la luz de los principios de legalidad e inexcusabilidad, sobre todo si se toma en consideración, que en casos similares, en los cuales integrantes del poder legislativo

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

han impugnado la omisión del órgano legislativo de concluir el procedimiento de selección de autoridades electorales, como parte de sus derechos político-electorales, esta Sala Superior ha resuelto lo que en derecho procede, como lo resolvió, por unanimidad de votos, en el expediente SUP-JDC-12639/2011, respecto de la impugnación presentada por Jaime Cárdenas Gracia, entonces diputado federal, en contra de la Cámara de Diputados, su Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios, por abstenerse de presentar la propuesta al Pleno del Congreso para la elección de los candidatos a Consejeros Electorales del otrora Instituto Federal Electoral.

Asimismo, por unanimidad de votos se resolvieron los expedientes SUP-JDC-896/2013 y sus acumulados promovidos por diversos diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en contra de la omisión de la Cámara de Diputados, su Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios de determinar la propuesta y presentarla al Pleno del Congreso en el proceso de elección del candidato a ocupar un cargo vacante de Consejero Electoral del mismo Instituto Federal Electoral.

Incluso entre quienes estaban participando como aspirantes en el procedimiento de designación de consejeros electorales relacionado con el expediente SUP-JDC-12639/2011, se encontraban ex funcionarios públicos de este Tribunal Electoral, respecto de los cuales se podría haber considerado que existía

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

la cercanía que implica el supuesto legal relativo a la amistad estrecha, derivada de la relación laboral que ahora se invoca como impedimento, con la magistrada ahora excusante o los magistrados de este órgano jurisdiccional, como es el caso de Enrique Ochoa Reza, quien más de un año se desempeñó como secretario particular de la magistrada¹³ y, posteriormente, como Director del Centro de Capacitación Electoral; Cecilia Tapia Mayans, quien también fungió por más de un año como secretaria particular de la magistrada¹⁴ y, con posterioridad, como Coordinadora de Institucionalización de la Perspectiva de Género y Roberto Duque Roquero, quien se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta de la Magistrada Alanis Figueroa y en la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales, sin que ello haya motivado la excusa de alguno de los magistrados integrantes de la Sala Superior en ese momento, no solo porque ese vínculo se presumió dentro de los parámetros de cordialidad y respeto, sin que actualizara algún impedimento, sino, además, porque como acontece en el caso, la cuestión a resolver no se relacionaba con alguno de los derechos de las personas mencionadas, sino con el procedimiento de designación de una de las autoridades electorales, el cual había quedado inconcluso, sin causa justificada.

En virtud de lo anterior, esta Sala Superior considera infundada la causa de impedimento invocada por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa para conocer de los juicios ciudadanos

¹³ Del 13 de agosto de 2007 al 31 de enero de 2009

¹⁴ Del 1 de febrero de 2009 al 15 de octubre de 2010

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015 y, por tanto no procede la excusa solicitada.

Por lo anterior, al haber resultado infundada la causa de impedimento, las razones expuestas por la Magistrada solicitante de la excusa, respecto a la competencia de esta Sala Superior para conocer de los presentes juicios ciudadanos, serán materia de análisis y discusión en el proyecto que presente a la consideración de los integrantes de este órgano jurisdiccional el Magistrado Instructor.

III. PUNTOS DE ACUERDO

ÚNICO. Es **infundada** la causa de impedimento invocada, y por lo tanto, no procede la excusa solicitada por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa para conocer e intervenir en el análisis, discusión y resolución del fondo de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015.

NOTIFÍQUESE, como corresponda.

Así, por **mayoría** de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, quien es la que solicita la excusa y, con los votos en contra de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López, quienes

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

formulan voto particular, ante la Secretaria General de
Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADO

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

**MANUEL GONZÁLEZ
OROPEZA**

MAGISTRADO

MAGISTRADO

**SALVADOR OLIMPO NAVA
GOMAR**

**PEDRO ESTEBAN
PENAGOS LÓPEZ**

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA INCIDENTAL DICTADA EN LOS JUICIOS ACUMULADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES DE EXPEDIENTE SUP-JDC-956/2015 Y SUP-JDC-970/2015, RESPECTO DE LA EXCUSA PRESENTADA POR LA MAGISTRADA MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA.

Porque no coincido con el criterio asumido por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, en cuanto a considerar infundada la causa de impedimento invocada por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para conocer e intervenir en el análisis, discusión y resolución de los juicios acumulados para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves de expediente **SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015**, promovidos por Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, Raúl Gracia Guzmán, Martín Orozco Sandoval, Luis Fernando Salazar Fernández, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, César Octavio Pedroza Gaytán, Francisco Salvador López Brito, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor Larios Córdova, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, emito **VOTO PARTICULAR**, en los términos siguientes:

A juicio del suscrito, en el incidente sobre calificación de la petición de excusa presentada por la Magistrada María del

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Carmen Alanis Figueroa, para conocer de los juicios acumulados al rubro identificados, se debe declarar que se actualiza la causa de impedimento expresada, conforme a los siguientes razonamientos.

A efecto de establecer la causa eficiente del impedimento expresado, se considera necesario transcribir las normas atinentes, que son al tenor siguiente:

**LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN**

Artículo 131.- Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:
[...]

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;

De los Impedimentos

[...]

Artículo 146.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

[...]

XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores.

De las Responsabilidades, Impedimentos y Excusas

Artículo 219.- Las responsabilidades de todos los miembros del Tribunal Electoral se regirán por el Título Octavo y las disposiciones especiales del presente Título de esta ley. Para estos efectos, salvo disposición en contrario, las facultades señaladas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las del Consejo de la Judicatura Federal se entenderán atribuidas a la Sala Superior y a la Comisión de Administración,

INCIDENTE SUP-JDC-956/2015 y SUPJDC-970/2015

respectivamente, y las del Presidente de la Suprema Corte al Presidente del Tribunal Electoral.

Las resoluciones que dicten la Sala Superior, el presidente del Tribunal o la Comisión de Administración, salvo los casos previstos en la parte final de la fracción IX del artículo 209 y en el párrafo segundo del artículo 241 de esta ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán definitivas e inatacables por lo que no procederá juicio o recurso alguno en contra de las mismas. En los casos de excepción a que se refiere el párrafo anterior, el magistrado o servidor destituido podrá apelar sin sujetarse a formalidad alguna, ante la Sala Superior del Tribunal en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de que se le notifique la determinación correspondiente. La Sala Superior resolverá en el término de treinta días hábiles la apelación presentada.

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser removidos de sus cargos en los términos de los artículos 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 220.- Los magistrados electorales estarán impedidos para conocer de aquellos asuntos en los que se actualice cualquiera de las causas establecidas en el artículo 146 de esta ley, en lo que resulte conducente.

Asimismo, a los secretarios y actuarios de las Salas, les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 149 de esta ley.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

[...]

XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

De las normas trasuntas se advierte lo siguiente:

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre los que se cuenta a los de la Sala Superior, están impedidos para conocer de aquellos medios de impugnación en los que se actualice cualquiera de las causales establecidas en el artículo 146, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En principio, es necesario señalar que el legislador no es omnicomprendivo y que, por tanto, no establece, en la ley, todos los supuestos en los cuales se puede actualizar la hipótesis normativa de impedimento para juzgar.

En opinión del suscrito, el legislador federal no previó, en el artículo 146, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, un catálogo taxativo de hipótesis normativas en las cuales se actualiza el impedimento para que un juez, magistrado o ministro, pueda conocer y resolver un determinado juicio o recurso, sino que ese precepto jurídico contiene una lista enunciativa de supuestos en los cuales se considera que un juez está impedido para resolver un asunto sometido a su conocimiento, de ahí que el legislador haya establecido, en la fracción XVIII, del citado numeral, que se

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

actualiza el impedimento en razón de cualquier circunstancia análoga a los supuestos expresamente señalados.

Es convicción del suscrito que la citada fracción XVIII contiene un margen amplio de actuación, que permite al órgano colegiado que ha de resolver sobre un impedimento, analizar las circunstancias subjetivas y objetivas, caso por caso, de aquellos asuntos en los que se plantee el impedimento o la excusa de un juez, magistrado o ministro.

En otro orden de ideas, de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos trasuntos, es conforme a Derecho concluir que se previó como causa de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, entre otras, las conductas previstas en el artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Al caso se debe tener presente que en el mencionado artículo 8, de la citada ley de responsabilidades administrativas, se prescribe que los servidores públicos se deben excusar de intervenir en cualquier forma, con motivo de su encargo, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que pueda resultar beneficiado un tercero, con quien el juzgador tenga relaciones de carácter laboral.

Lo anterior tiene como fin, hacer prevalecer el principio de imparcialidad en el resolutor de un determinado medio de impugnación, ya sea administrativo o jurisdiccional.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Al respecto cabe destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, al establecer, en la parte conducente, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por tribunales que deben estar expeditos para impartirla, en los plazos y términos de ley, además de que las sentencias que al efecto dicten deben tener como ejes rectores los principios de prontitud, expedités, integridad, gratuidad e **imparcialidad**.

Este derecho fundamental o constitucional, de igual forma, está contenido en diversos tratados tuteladores de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, son normas que integran el vigente Sistema Jurídico Mexicano —considerado actualmente por la doctrina jurídica como “*bloque de constitucionalidad*”—, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Constitución federal.

Entre esos ordenamientos internacionales están:

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, al prever en su artículo 10, lo siguiente:

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como "*Pacto de San José*", textualmente establece en su artículo 8, párrafo 1:

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[...]

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente el artículo 14, párrafo 1, que es al tenor siguiente:

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil [...]

De los preceptos transcritos, se concluye con toda claridad que, en el ámbito internacional, los países han consagrado a la tutela judicial efectiva como uno de los pilares elementales del sistema de derechos fundamentales, a nivel mundial.

Así, los Estados que han suscrito y ratificado los correspondientes tratados de derechos fundamentales, a que se ha hecho mención, reconocen expresamente la necesidad

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

de que todas las personas tengan derecho verdadero de acceso a la impartición de justicia, a fin de que puedan dirimir, ante los tribunales competentes, independientes e **imparciales**, previamente instituidos en la legislación aplicable, los conflictos de intereses de trascendencia jurídica, en los que participen, conflictos o controversias caracterizados por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución federal, comprende diversos principios, tal como se advierte en la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguiente:

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.- *La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento*

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

La tesis en cita es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, octubre de dos mil siete, página doscientas nueve.

Cabe destacar que entre los principios fundamentales que menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales esta Sala Superior, en opinión del suscrito, debe asumir como criterios orientadores, están los siguientes:

1. Justicia pronta. Consistente en el deber de las autoridades encargadas de impartir justicia, al resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establecen las leyes;

2. Justicia completa. La autoridad que conoce del asunto debe resolver respecto de todos y cada uno de los aspectos controvertidos;

3. Justicia imparcial. El juzgador debe emitir la resolución que en Derecho corresponda, sin favorecer o agravar indebidamente a alguna de las partes; la sentencia

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

debe ser apegada a las normas que integran el sistema jurídico, sin favoritismo respecto de alguna de las partes y sin arbitrariedad en contra de la otra parte, y

4. Justicia gratuita. Los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no deben cobrar a las partes en conflicto emolumento alguno, con motivo de la sustanciación o la resolución de la controversia planteada.

De los principios mencionados se debe destacar el relativo a la imparcialidad del órgano encargado de dirimir los litigios correspondientes.

Uno de los derechos fundamentales de las personas, como principio previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en la necesidad de que los justiciables cuenten con una organización de tribunales establecida expresa y previamente en la ley, caracterizada, entre otros aspectos, por su independencia e imparcialidad, al resolver las controversias.

Para hacer efectivo el principio constitucional de imparcialidad, de las personas encargadas de impartir justicia, sean jueces, magistrados o ministros, la normativa constitucional y legal aplicable establece una serie de preceptos para garantizar que el juzgador sea auténtico tercero en la controversia, ajeno al interés de cada una de las partes en conflicto, a fin de evitar que su decisión esté viciada por

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

determinado interés o circunstancia, ya sea de naturaleza política, económica, social, cultural, jurídica o de cualquier otra naturaleza, con lo cual se pretende hacer posible que los justiciables accedan a una justicia realmente imparcial, objetiva, desinteresada.

Al respecto cabe destacar que los mecanismos para garantizar la imparcialidad de los juzgadores no se agotan con una sola previsión normativa, sino que pueden estar contenidos en diversos preceptos y ordenamientos, constitutivos del sistema jurídico nacional.

Así, se reitera que el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé diversos supuestos en los cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de determinados asuntos de la competencia del órgano judicial, unipersonal o colegiado, al que están adscritos.

Tal disposición, como he mencionado, es aplicable a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 220, de la misma Ley Orgánica.

Los impedimentos previstos, como el suscrito ha precisado en este voto, tienen como propósito garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos mencionados en los

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

correspondientes preceptos constitucionales y legales, emergentes de las circunstancias fácticas y jurídicas que se pueden presentar, tales como el parentesco con alguna de las partes, en las líneas y grados señalados en la normativa aplicable; la amistad o enemistad con los partícipes directos de la relación procesal; el interés personal en el asunto por la existencia de un vínculo laboral o profesional, así como muchas otras hipótesis, según se advierte del texto del citado artículo 146.

Cabe reiterar que los mencionados supuestos legales, de impedimento o de excusa, no se deben considerar una lista taxativa de hipótesis en las que surte efecto la imposibilidad jurídica para el juzgador, a fin de no conocer y resolver sobre determinado juicio o recurso, porque resulta evidente que el legislador no puede prever la totalidad de circunstancias que, en la realidad social, se presentan, de ahí que sea factible considerar que los supuestos legales de impedimento, previstos en el respectivo ordenamiento jurídico, son únicamente de carácter enunciativo y no limitativo, a fin de comprender, en la cotidiana práctica jurisdiccional, otros casos en los que se actualiza una causal de impedimento para juzgar.

En efecto, con independencia de las causales expresamente previstas por el legislador, el suscrito concluye que las hipótesis por las cuales un juzgador se debe considerar impedido para conocer y resolver un determinado juicio o recurso, deben ser analizadas caso por caso, es decir, se debe

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

analizar detalladamente cuál es la situación concreta que se invoca para determinar si un juez está o no impedido para conocer de un asunto, en razón de la actualización de una causa objetiva o subjetiva, según se presente el particular.

Para el suscrito es evidente que, en este caso concreto, acorde a las circunstancias de hecho y Derecho que se presentan, la imparcialidad objetiva de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, consecuente con lo expresado en su escrito de petición de excusa, no está plenamente garantizada.

En efecto, para el suscrito, resulta evidente que existe duda fundada y razonable sobre su imparcialidad, objetividad e independencia, por dos razones fundamentales, uno objetivo y otro subjetivo:

1. El hecho claro, indubitable y objetivo, consistente en el reconocimiento que hace la mencionada Magistrada Alanis Figueroa, en el sentido de que uno de los participantes en la terna para elegir al faltante Magistrado electoral, integrante de esta Sala Superior, es Secretario Instructor adscrito a la Ponencia a su cargo. Lo anterior, de conformidad con lo manifestado por la propia Magistrada, en su escrito por el cual solicita excusa, para resolver los juicios al rubro indicados.

Al respecto, aduce de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, de manera literal, lo siguiente: *“En el caso, los tres integrantes de la terna laboran en la Sala Superior del*

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo que entre ellos y la suscrita existe una relación laboral. En efecto, Javier Aguayo Silva, se desempeña como Secretario Instructor, en la Ponencia a mi cargo [...]”.

Cabe destacar que si bien la relación laboral formal del Licenciado Javier Aguayo Silva es con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también es cierto que esta relación laboral y consecuente impedimento se concreta con la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, porque el servidor público postulado candidato a Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está adscrito a la Ponencia de la Magistrada Alanis Figueroa, quien ejerce funciones de dirección y relaciones de supra-subordinación con el mencionado servidor público, Javier Aguayo Silva.

2. Un hecho o elemento subjetivo, manifestado y reconocido expresamente por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, consistente en la afectación a su fuero interno, personal, como juzgadora, dada la participación de su Secretario Instructor en el procedimiento de designación del Magistrado faltante en esta Sala Superior.

La Magistrada Alanis ha manifestado su petición de excusa al considerar que se actualiza un impedimento para conocer e intervenir en el análisis, discusión y resolución de los

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

juicios al rubro indicados, por la relación personal y laboral que la vinculan con el Licenciado Javier Aguayo Silva.

En este sentido, el suscrito concluye que ante la petición de excusa de un juzgador, sus pares deben respetar tal decisión, sin calificarla de procedente o improcedente, dado que es el mismo juzgador quien considera en su fuero interno, que no debe conocer de un determinado asunto, para no quebrantar el principio de imparcialidad, conforme al cual debe actuar todo juzgador.

Respecto de la posibilidad de calificación de un impedimento para conocer de un determinado asunto, ello sólo se puede dar en el supuesto de que una parte, en el correspondiente medio de impugnación, manifieste que determinado juzgador no conozca de un juicio o recurso, por existir una causa jurídicamente establecida como impedimento para juzgar en el caso concreto.

Al respecto debo exponer que en la actualidad la actividad de los jueces denota la existencia de limitantes, exigencias y directrices, tendentes a la regulación de la actuación jurídica en un caso concreto. Así, es conforme a Derecho sostener que existe una vinculación natural y lógica entre la emisión de un fallo o sentencia justa y los elementos problemáticos de los casos concretos.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Lo anterior solo puede ser resuelto a partir del prudente arbitrio del juzgador, aplicando reglas de la ética, la moral y la axiología, cuyos principios deben estar presentes en el quehacer cotidiano de los jueces; por ende, la prudencia jurídica que denota una actividad de carácter racional, basada en decisiones jurídicas completas, tiene como fin último la orientación de preservar la justicia en la sentencia dictada.

Al respecto cabe citar a J. M. Martínez Doral, quien en su obra intitulada “La estructura del conocimiento jurídico”, editorial Eunza, Pamplona, España, año 1963, a fojas ochenta y nueve a noventa, de la prudencia jurisdiccional señala:

[...] Para que la prudencia pueda ejercer su imperio con garantía de acierto, es menester que el dinamismo voluntario se mantenga establemente orientado hacia el justo fin, por medio de aquellos dispositivos rectificadores de la voluntad, que se llaman virtudes morales. Esta especial condición de la prudencia da a la actividad jurídica una calidad humana y un tono de elevación y de exigencia que en ningún momento puede ser olvidado. Y nos hace observar que [...] la actividad prudencial exige en quien la ejerce un conjunto de predisposiciones favorables a la verdad y a la justicia [...]

En estas circunstancias, a fin de no incurrir en violación al derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia por tribunales imparciales, en los cuales se respeten las reglas del debido proceso legal, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyo que la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa sí está impedida para conocer y resolver de los juicios acumulados para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves de

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

expediente **SUP-JDC-956/2015** y **SUP-JDC-970/2015**, promovidos por Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, Raúl Gracia Guzmán, Martín Orozco Sandoval, Luis Fernando Salazar Fernández, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, César Octavio Pedroza Gaytán, Francisco Salvador López Brito, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor Larios Córdova, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas.

Finalmente debo exponer que, acorde a la conformación de la terna para elegir al Magistrado faltante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien es verdad que uno de los integrantes es colaborador de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, también es cierto que los dos restantes participantes, integrantes de la terna de referencia, es decir, los licenciados Enrique Aguirre Saldivar y Julio César Cruz Ricárdez, son Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.

En consecuencia, por las razones expresadas en los párrafos precedentes, a fin de garantizar la vigencia plena del principio de imparcialidad, en el dictado de la sentencia que, en su caso, resuelva la controversia planteada, también se debe considerar impedido, para conocer y resolver los juicios al rubro identificados, al Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

En efecto, entre el mencionado Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar y los Secretarios de Estudio y Cuenta, Enrique Aguirre Saldivar y Julio César Cruz Ricárdez, existe relación laboral, porque son servidores públicos adscritos a su Ponencia, motivo por el cual, a partir del hecho objetivo calificado legalmente como impedimento, el citado juzgador se debe abstener de conocer, discutir y resolver los juicios al rubro identificados.

En el anotado contexto, es convicción del suscrito que el Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar no debió de haber conocido del incidente de excusa presentado por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, dado que, como se ha expuesto en este voto particular, el Magistrado Ponente Nava Gomar está en similar circunstancia, lo cual conlleva a la conclusión elemental que se debió turnar a otro Magistrado el mencionado incidente, a efecto de que se resolviera de forma conjunta el planteamiento de excusa de la Magistrada Alanis Figueroa y la de impedimento del Magistrado Nava Gomar, dado que el planteamiento hecho afecta a los dos Magistrados por igual.

En suma, congruentes con lo ya expuesto, razonado y fundado, en este voto particular, es mi convicción que los Magistrados María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar, deben ser declarados impedidos y no pueden ni deben conocer, discutir y resolver los juicios acumulados al rubro indicados.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Por lo expuesto y fundado, emito el presente **VOTO PARTICULAR.**

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITE EL MAGISTRADO PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA INCIDENTAL DICTADA EN LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES DE EXPEDIENTE SUP-JDC-956/2015 Y SUP-JDC-970/2015, RESPECTO DE LA EXCUSA PRESENTADA POR LA MAGISTRADA MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA.

Disiento respetuosamente del criterio asumido por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, en cuanto a considerar infundada la causa de impedimento invocada por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para conocer e intervenir en el análisis, discusión y resolución de los juicios ciudadanos **SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015.**

En mi concepto, es fundada la causa de impedimento, y por tanto, procedente la excusa planteada por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

De los artículos 131, 146, 216 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 8, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre los que se incluyen los de la Sala Superior, están impedidos para conocer de aquellos medios de impugnación en los que se actualice cualquiera de las causales establecidas en el artículo 146, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En el citado precepto, no se prevé un catálogo taxativo de hipótesis normativas en las cuales se actualiza el impedimento, sino que contiene una lista enunciativa de supuestos en los cuales se considera que un juez está impedido para resolver un asunto sometido a su conocimiento, de ahí que el legislador haya establecido, en la fracción XVIII, del citado numeral, que se actualiza el impedimento en razón de cualquier circunstancia análoga a los supuestos expresamente señalados.

La citada fracción XVIII contiene un margen amplio de actuación, que permite al órgano colegiado que ha de resolver sobre un impedimento, analizar las circunstancias subjetivas y objetivas, caso por caso, de aquellos asuntos en los que se plantee el impedimento o la excusa de un juez, magistrado o ministro.

De la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados es conforme a Derecho establecer, que se previó como causa de responsabilidad de los servidores públicos del Poder

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Judicial de la Federación, entre otras, las conductas previstas en el artículo 8, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En el caso se debe tener presente que en el mencionado artículo 8, de la citada ley de responsabilidades administrativas, se preve que los servidores públicos se deben excusar de intervenir en cualquier forma, con motivo de su encargo, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que pueda resultar beneficiado un tercero, con quien el juzgador tenga relaciones de carácter laboral.

Lo anterior tiene como fin, hacer prevalecer el principio de imparcialidad en el resolutor de un determinado medio de impugnación, ya sea administrativo o jurisdiccional.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución federal, comprende diversos principios, tal como se advierte en la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: **ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.**

Por otra parte, en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se reiteran diversos supuestos en los

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de determinados asuntos de la competencia del órgano judicial, unipersonal o colegiado, al que están adscritos.

Tal disposición resulta aplicable a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 220, de la misma Ley Orgánica.

Los impedimentos tienen como propósito garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos en los casos que prevén los preceptos constitucionales y legales, emergentes de las circunstancias fácticas y jurídicas que se pueden presentar, tales como el parentesco con alguna de las partes, en las líneas y grados señalados en la normativa aplicable; la amistad o enemistad con los partícipes directos de la relación procesal; el interés personal en el asunto por la existencia de un vínculo laboral o profesional, entre otras hipótesis.

Cabe reiterar que los mencionados supuestos legales, de impedimento o de excusa, no se deben considerar una lista taxativa de hipótesis en las que surte efecto la imposibilidad jurídica para el juzgador, a fin de no conocer y resolver sobre determinado juicio o recurso.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

De manera que, con independencia de las causales expresamente previstas por el legislador, se concluye que las hipótesis por las cuales un juzgador se debe considerar impedido para conocer y resolver un determinado juicio o recurso, deben ser analizadas en cada concreto, es decir, se debe analizar detalladamente cuál es la situación concreta que se invoca para determinar si un juez está o no impedido para conocer de un asunto, en razón de la actualización de una causa objetiva o subjetiva, según se presente el particular.

En mi concepto, es evidente que, en este caso concreto, acorde a las circunstancias de hecho y Derecho que se presentan, la imparcialidad objetiva de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, consecuente con lo expresado en su escrito de petición de excusa, no está plenamente garantizada.

En efecto, es evidente que existe duda fundada y razonable sobre su imparcialidad, objetividad e independencia, por dos razones fundamentales, uno objetivo y otro subjetivo:

1. El hecho claro, indubitable y objetivo, consistente en el reconocimiento que hace la mencionada Magistrada Alanis Figueroa, en el sentido de que uno de los participantes en la terna para elegir al faltante Magistrado electoral, integrante de esta Sala Superior, es Secretario Instructor adscrito a la Ponencia a su cargo. Lo anterior, de conformidad con lo manifestado por la propia Magistrada, en su escrito por el cual solicita excusa, para resolver los juicios al rubro indicados.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Al respecto, aduce de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, de manera literal, lo siguiente: *“En el caso, los tres integrantes de la terna laboran en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo que entre ellos y la suscrita existe una relación laboral. En efecto, Javier Aguayo Silva, se desempeña como Secretario Instructor, en la Ponencia a mi cargo [...]”*.

2. Un hecho o elemento subjetivo, manifestado y reconocido expresamente por la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, consistente en la afectación a su fuero interno, personal, como juzgadora, dada la participación de su Secretario Instructor en el procedimiento de designación del Magistrado faltante en esta Sala Superior.

La Magistrada Alanis ha manifestado su petición de excusa al considerar que se actualiza un impedimento para conocer e intervenir en el análisis, discusión y resolución de los juicios al rubro indicados, por la relación personal y laboral que la vinculan con el Licenciado Javier Aguayo Silva.

En este sentido, advierto que ante la petición de excusa de un juzgador, sus pares deben respetar tal decisión, sin calificarla de procedente o improcedente, dado que ha sido el mismo juzgador el que ha concluido en su fuero interno no conocer de un determinado asunto.

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Respecto de la posibilidad de calificación de un impedimento para conocer de un asunto, ello sólo se puede dar en el supuesto de que una parte en el medio de impugnación haga solicitud de recusación, lo cual en el caso no acontece.

Al respecto debo exponer que en la actualidad la actividad de los jueces denota la existencia de limitantes, exigencias y directrices, tendentes a la regulación de la actuación jurídica en un caso concreto. Así, es conforme a Derecho sostener que existe una vinculación natural y lógica entre la emisión de un fallo o sentencia justa y los elementos problemáticos de los casos concretos.

En estas circunstancias, a fin de no incurrir en violación al derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia por tribunales imparciales, en los cuales se respeten las reglas del debido proceso legal, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyo que la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa sí está impedida para conocer y resolver de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves de expediente **SUP-JDC-956/2015 y SUP-JDC-970/2015**, promovidos por Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, Raúl Gracia Guzmán, Martín Orozco Sandoval, Luis Fernando Salazar Fernández, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, César Octavio Pedroza Gaytán, Francisco Salvador López Brito, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki

**INCIDENTE SUP-JDC-956/2015
y SUPJDC-970/2015**

Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor Larios Córdova, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente **VOTO PARTICULAR**.

MAGISTRADO

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ